EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1390/010 de fecha 11 de noviembre de 2010, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Milton de Alva Gutiérrez y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 1819 del Código Civil para el Estado de Colima.

SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala textualmente que:

- “La coherencia en nuestros cuerpos legislativos refleja el orden de la normatividad misma, la Constitución de nuestra entidad se encuentra en la cúspide de la legislación del Estado, por lo tanto se le debe de respetar, así como a todas las leyes que de ella emanen. De aquí se desprende el principio de Supremacía de las leyes, encontrándose en lo más alto la Carta Magna local, por lo que ningún ordenamiento o disposición secundaria puede estar por encima de ella.
- Un ejemplo de lo anterior, es el artículo 1 fracción XII de la Ley Fundamental aludida, el cual establece que toda persona que sufra una lesión en sus bienes y derechos, con motivo de la actividad administrativa del Estado y de los Municipios tendrá derecho a ser indemnizada en forma equitativa, conforme a las bases y procedimientos que establezca la ley. La obligación del Estado y de los Municipios de resarcir los daños y perjuicios será directa.
- Como tal, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima, en su artículo primero, expresa que la responsabilidad patrimonial será objetiva y directa; la indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en esta Ley y en las disposiciones legales a que la misma hace referencia. Por lo anterior, existe una contradicción con respecto a la responsabilidad que se maneja dentro del Código Civil vigente en nuestra entidad, pues en el artículo 1819 refiere a que la responsabilidad es subsidiaria y sólo podrá hacerse efectiva contra el Estado, cuando el funcionario directamente responsable no tenga bienes, o los que tenga no sean suficientes para responder del daño causado.
- Se advierte, por lo tanto una contradicción entre el tercero de los ordenamientos mencionados respecto de los dos primeros, mismos que se encuentran vigentes en el Estado. De tal suerte que, resulta necesario que exista congruencia con relación a los tres cuerpos de leyes materia de la

presente iniciativa lo que daría certeza a la ciudadanía en el momento del que se vieran en la necesidad de ejercer acciones contra el Estado, tal y como lo establece la Ley de Responsabilidad Patrimonial, dejando así del lado posibles interpretaciones erróneas que les pudieran causar un menoscabo en su patrimonio.”

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de haber analizado la iniciativa en comento, determina que la reforma planteada por el iniciador es viable atendiendo al principio de que la voluntad de los funcionarios o servidores públicos al actuar en ejercicio de sus funciones, es la voluntad propia del Estado al que representan, por lo que los daños y perjuicios cometidos o causados por sus servidores o funcionarios deben ser considerados como obras del ente público.

Al respecto, se debe tener presente que la responsabilidad patrimonial del Estado (Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios) se prevé y define desde nuestro máximo Cuerpo Normativo: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 113, segundo párrafo, señala de manera expresa que: *“La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.”*

En este sentido, la persona moral denominada Estado, que para los efectos de la iniciativa materia del presente dictamen debe entenderse solo respecto de la actividad administrativa que desarrollan los gobiernos estatal y municipales y sus respectivos organismos constituidos en términos de ley, debe responder de los actos que llevan a cabo los funcionarios o servidores públicos que la representan, de ahí la importancia y trascendencia de que la actividad llevada a cabo por el funcionario o servidor público que, en su caso, llegue a causar un daño o lesión a un particular, debe partir necesariamente de la actividad propia e inherente a su cargo público, esto es, del ejercicio de las funciones públicas que le estén encomendadas o facultadas por la ley o por la autoridad competente legalmente autorizada para ello.

A juicio de esta Comisión que dictamina le asiste la razón al autor de la iniciativa objeto de estudio, cuando señala que la Constitución Particular del Estado, nuestro máximo ordenamiento normativo a nivel local, en su artículo 1o. fracción XII, establece el derecho de toda persona que sufra una lesión en sus bienes y derechos, derivada de la actividad administrativa de los gobiernos estatal y municipales, a recibir una indemnización, teniendo estas entidades públicas la obligación de resarcir los daños y perjuicios causados de manera *directa* y, que, por su parte, la ley de la materia, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima, en su artículo 1º., prevé de manera expresa que la responsabilidad patrimonial es *objetiva y directa*. Por lo que, ciertamente, el Código Civil del Estado requiere de una reforma en su artículo 1819, para el efecto de adecuarse tanto al texto de la Carta Magna como al marco constitucional local y a la Ley de Responsabilidad Patrimonial, toda vez que el mismo actualmente al referirse a la obligación del Estado de responder de los daños causados por sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones establece la

responsabilidad subsidiaria para el Estado, lo que significa que sólo puede hacerse efectiva en el patrimonio de esas entidades públicas (gobiernos estatal y municipales) cuando el funcionario que ha causado el daño, carezca de bienes o los que tenga sean insuficientes para satisfacer el importe de la reparación.

Es así que la propuesta de reforma al artículo 1819 del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima, ubicado dentro del Título denominado Fuentes de las obligaciones, en su Capítulo V denominado De las obligaciones que nacen de los actos ilícitos, resulta viable y procedente a fin de ajustarse y actualizarse, como ya se ha citado, tanto a lo dispuesto por la Constitución Federal como al marco constitucional local y a legislación secundaria de la materia, como lo es la Ley de Responsabilidad Patrimonial.

No obstante lo anterior, esta Comisión no comparte el señalamiento que realiza el autor de la iniciativa en su exposición de motivos, *in fine*, cuando expresa que en caso de no existir congruencia entre los tres ordenamientos legales en comento podrían presentarse posibles interpretaciones erróneas que le pudiesen causar un menoscabo a la ciudadanía en su patrimonio en el momento en que ésta se viera en la necesidad de ejercer acciones contra el Estado, situación que, si bien, *por un lado*, se reconoce la necesidad de llevar a cabo la adecuación o actualización ya referida, *por otro*, también lo es que *jurídicamente* no podría dar cabida a interpretaciones erróneas, toda vez que es la propia Constitución Federal en su artículo 113, segundo párrafo, y la Constitución Política del Estado las que señalan de manera expresa que la responsabilidad del Estado por los daños que, por su actividad administrativa, causen en los bienes o derechos de los particulares, *será objetiva y directa*, y siendo como lo es, que tales ordenamientos constituyen los máximos cuerpos jurídicos a nivel federal y local y de que ésta última deriva de la primera que es la Norma de Normas (Ley de Leyes), de la cual emana el principio Kelseniano de la Supremacía Constitucional, por lo que ningún ordenamiento o legislación secundaria, como lo es el Nuevo Código Civil Estatal, puede contravenir o estar por encima del texto de la Norma Fundamental, es que se considera que bajo ninguna razón o circunstancia se puede dar lugar a alguna interpretación equívoca contraria a lo previsto en la Ley Suprema del Sistema Jurídico Mexicano.

Por otro lado, cabe precisar que es la víctima del daño, la que debe acreditar y probar que el funcionario o servidor público, incurrió en la causal que originó la afectación en el desempeño de su cargo y que de su acto se ha originado el daño cuya reparación se solicita, mediante la indemnización correspondiente, pues la responsabilidad deriva de una conducta culposa o dolosa del representante del poder público, causante directo del daño, y es él quien en principio debe o debería responder directamente de la reparación e indemnización del daño o perjuicio cometido, pero como ha actuado en representación del Poder Estatal, esto es, del ente de gobierno estatal o municipal según el caso, es éste ente público quien debe responder directa y objetivamente del daño e indemnización que ha causado su empleado o servidor público en ejercicio de sus funciones.

Finalmente, por los argumentos vertidos con antelación es que se considera procedente y congruente la reforma planteada al citado ordenamiento civil sustantivo en su numeral 1819, como se propone en el texto de la iniciativa que se dictamina.

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente

D E C R E T O No. 300

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 1819 del Nuevo Código Civil del Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera:

ART. 1819.- El Estado tiene obligación de responder de los daños causados por sus funcionarios en el ejercicio de las funciones que les estén encomendadas. Esta responsabilidad es objetiva y directa y sólo podrá hacerse efectiva contra el Estado.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, el día quince de abril del año dos mil once

**C. ENRIQUE ROJAS OROZCO
DIPUTADO PRESIDENTE**

**C. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS
DIPUTADO SECRETARIO**

**C. JUAN ROBERTO BARBOSA LÓPEZ
DIPUTADO SECRETARIO**